

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

D I C T A M E N
INICIATIVA 3593

14 MAY 2007

HONORABLE PLENO:

La Comisión de Relaciones Exteriores, recibió de la Dirección Legislativa del Congreso, el expediente bajo registro número 3593, que contiene la copia certificada del “Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República Federativa de Brasil”, firmado en Brasilia el 20 de agosto del 2004. El expediente fue remitido originalmente por el Presidente de la República, en ejercicio de la función que le confiere la literal k) del artículo 183 de la Constitución Política de la República.

DOCUMENTOS APORTADOS:

A la copia certificada del Tratado de Extradición Guatemala-Brasil, se adjuntaron los siguientes documentos:

- Opinión No. ATJ-016-2002 de fecha 30 de agosto del 2002 de la Asesoría Técnica Jurídica del Ministerio Público.
- Oficio REF. 002-2004-myra de fecha 21 de enero del 2004 del Ministerio de Gobernación, acompañando de dictamen 0085 de fecha 19 de enero de 2004 de Asesoría Jurídica de ese Ministerio.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- Oficio número 1399/smc de fecha 20 de abril de 2004 de la Secretaría de la Presidencia del Organismo Judicial, acompañado de memorando No. 380-2002/MGR/jcor de fecha 3 de septiembre de 2002 de Asesoría Jurídica del Organismo Judicial.
- Memorando número 403-2006 de fecha 20 de noviembre de 2006 de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONTENIDO DEL TRATADO.

El Tratado suscrito entre los Gobiernos de Guatemala y Brasil, tiene por objeto normar la extradición entre ambos países, constando el mismo de quince capítulos y veinticuatro artículos. Por sus normas, cada una de las Partes contempla extraditar hacia la otra, de conformidad con las disposiciones del Tratado, del derecho internacional y de las normas internas de cada una de ellas, a cualquier persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por la otra Parte para ser procesada, enjuiciada o para la imposición o ejecución de una pena por un delito extraditable, considerando como tal, un hecho tipificado como delito, tanto por las leyes de la Parte requirente como de la Parte requerida, cualquiera que sea la denominación que se le dé, debiendo ser punible en ambas Partes con una pena privativa de libertad, cuya duración máxima no debe ser inferior a dos años de prisión.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El Tratado establece que cuando la extradición se pida para una persona que haya sido sentenciada, se concederá ésta si la pena por cumplir es de por lo menos un año, así como para una conducta tipificada como delito contra las leyes de ambas Partes, no importando si dichas leyes consideran que la conducta constitutiva de delito dentro de la misma naturaleza de delitos o denominan al delito con la misma terminología y que la totalidad de presunta conducta delictiva de la persona cuya extradición se solicita, deberá ser tomada en cuenta y no importará si, conforme a las leyes de las Partes, difieren los elementos constitutivos del delito.

En igual forma se contempla que cuando se solicita la extradición por delitos contra leyes relativas a impuestos, derechos de aduana, controles de divisas u otras materias de ingresos, no podrá negarse con fundamento en que el derecho de la Parte requerida no contempla el mismo tipo de impuesto o derecho o no tiene una reglamentación de impuestos, derechos, aduanas o control de divisas del mismo tipo que la establecida en el Derecho de la Parte requirente. También se regulan los supuestos de cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio de la Parte requirente y cuando la solicitud de extradición se refiere a varios delitos.

En otros de sus pasajes, el Tratado establece los casos de denegación obligatoria de la extradición, la cual no se concederá por delitos políticos o delitos relacionados con un delito político, estableciendo los casos de excepción. Tampoco se concederá cuando la persona requerida esté siendo procesada o ha sido enjuiciada y

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

sentenciada o absuelta en el territorio de la Parte requerida por el delito por el cual se solicita la extradición y cuando la acción o la pena estuvieren prescritas conforme a la legislación de la Parte requirente y de la Parte requerida.

La denegación obligatoria de la extradición se presenta cuando la Parte requerida tenga razones suficientemente fundadas para suponer que la solicitud de extradición ha sido presentada con miras a enjuiciar o castigar a la persona requerida por razones de raza, religión, nacionalidad, sexo u opinión política y cuando la persona hubiere sido condenada o deba ser juzgada en la Parte requirente por un tribunal especial o secreto.

Cualquiera de las Partes tiene el derecho de rehusar la extradición de sus nacionales, pero la Parte que por esa razón no entregue a su nacional, promoverá a solicitud de la Parte requirente, su enjuiciamiento, manteniendo informada del curso del proceso y finalizado éste, remitirá copia de la sentencia.

Igualmente se contemplan cinco casos en los cuales las Partes a su discreción, pueden denegar la extradición, siendo ellos: cuando la Parte requerida considere que el delito ha sido cometido en su totalidad o en Parte dentro de su territorio, cuando la persona requerida ha sido finalmente absuelta o declarada culpable en un tercer Estado por el mismo hecho delictivo, cuando la Parte requerida excepcionalmente considere que por circunstancias personales del sujeto requerido, la extradición sería incompatible por razones humanitarias y cuando se trate de un delito conforme a la ley militar y no de acuerdo a la ley

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

penal ordinaria y que en ningún caso se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido menor de 18 años al tiempo de la comisión del delito. En este último caso la Parte requerida aplicará únicamente las medidas correctivas que de acuerdo a su ordenamiento jurídico procederían si el hecho hubiere sido cometido en su territorio. No obstante, cuando la persona requerida está siendo procesada está cumpliendo una sentencia en el territorio de la Parte requerida por un delito diferente por el cual se solicita la extradición, la Parte requerida puede posponer la entrega hasta la conclusión del procedimiento o el cumplimiento de la totalidad o de una parte de la pena impuesta; de esta decisión debe informar a la Parte requirente.

En otros de los artículos de su desarrollo, el Tratado contempla las garantías que deben otorgarse a la persona a extraditar, dentro de las que mencionan que la persona no debe ser entregada a un tercer Estado y no será procesada por otro delito distinto por el cual se pide la extradición, salvo los casos de excepción y cumpliendo los requisitos contemplados en el propio Tratado; garantía a una amplia defensa, asistencia de un defensor y de un intérprete de ser necesario, así como que le sea computado el tiempo de prisión que hubiere sido impuesto al reclamado en la Parte requerida por motivos de la extradición.

Igualmente se contemplan como garantías la no aplicación de la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad y que, cuando se debieran imponer dichas penas, la Parte requirente se obligue a imponer la pena máxima privativa de libertad.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El Tratado establece igualmente cuál es el procedimiento para el pedido de extradición y los requisitos que deberán cumplirse; el mismo se complementa con información, adición y detención provisional conforme lo establece el propio Tratado.

El Tratado establece también la extradición simplificada o voluntaria, la cual se da cuando la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial de la Parte requerida, expresa su conformidad para ser entregada a la Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda. En caso de existir solicitudes concurrentes de extradición, la Parte requerida determinará a cuál de los Estados concederá la extradición y notificará su decisión a los Estados requirentes, a tal efecto, se tomará en cuenta lo siguiente: cuando se trate de un mismo delito, el Estado en cuyo territorio se hubiere cometido, el Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual la persona reclamada y, el Estado que primero haya presentado la solicitud de extradición.

El Tratado contempla igualmente otros aspectos relacionados con la preferencia al Estado que según la legislación aplicable y que tenga jurisdicción sobre el delito más grave, el procedimiento para entrega de la persona reclamada, entrega de valores, objetos y documentos, así como las reglas de especialidad que se aplicarán a la persona extraditada, el tránsito de la persona reclamada, los gastos y la forma de cubrir los mismos por toda solicitud de extradición y la forma de solución de las controversias que de su aplicación puedan surgir.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Excepcionalmente se establece que la Parte requerida podrá denegar la extradición, cuando su cumplimiento fuere contrario a su seguridad, orden público o a otros intereses esenciales.

CONTENIDO DE LAS OPINIONES RECABADAS.

De las opiniones recabadas, es importante destacar, por ser ésta la más completa y que toca los elementos fundamentales del Tratado, la opinión del Ministerio Público, la cual fue elaborada por conducto de su Asesoría Técnica Jurídica, que en su parte conducente contiene los siguientes elementos:

“IV. OPINION. Que el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte en este caso el modelo presentado, favorecería los trámites correspondientes de extradición, sin embargo, en virtud de la semántica y redacción utilizada, cabe hacer las siguientes acotaciones:

1. El Artículo 1 expresa que los Estados Parte se OBLIGAN recíprocamente a entregarse a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes.

Sin embargo el Artículo 345 del Código de Derecho Internacional Privado expresa que no hay obligación de los Estados Parte a entregar a sus nacionales, e impone seguidamente la obligación correspondiente en su defecto.

Si bien es cierto que una ley posterior deroga una anterior, también es cierto que en materia de derechos humanos se estaría frente

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

a una involución, toda vez que por diversas razones tanto de orden social, económico y psicológico, cualquier individuo gozaría de mayores ventajas al ser juzgado por el Estado del cual es originario. Artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República.

2. El Artículo 2 expresa que darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes de los Estados Parte, cualquiera que sea la denominación de los delitos.

Sin embargo, el Artículo 355 del Código de Derecho Internacional Privado reza que no podrá pedirse la extradición por delitos políticos conexos. Posteriormente en el Artículo 5 del Convenio modelo, si hace tal salvedad, pero para más claridad y fácil comprensión tal circunstancia debería agregarse al numeral 1 del Artículo 2 analizado, haciendo la salvedad correspondiente.

3. El Artículo 11 expresa que la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición.

No obstante lo anterior, el Artículo 345 del Código de Derecho Internacional Privado expresa que ningún Estado estará obligado a entregar a uno de sus nacionales.

De conformidad con lo anterior y a lo que establecen los Artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República, 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 9 de la Ley del Organismo Judicial, la redacción del Artículo 11 numeral uno del modelo, deberá reestructurarse, no únicamente en cuanto a su redacción, sino que también en cuanto a su espíritu, toda vez que con

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

tal norma se estaría disminuyendo o involucionando en materia de derechos humanos, lo que daría lugar a material de defensa en la construcción de argumentos que tiendan a impedir o bien retrasar la extradición.

4. El Artículo 13, estipula que no será aplicable la pena de muerte o la de privación de libertad a perpetuidad como pena máxima en el Estado requirente, y sólo será admisible si el Estado Parte requiere aplicarle la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido.

Al respecto cabe mencionar que el Artículo 304 del Código de Derecho Internacional Privado establece que “ningún Estado Contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás”.

De acuerdo a los principios que informan el Derecho Penal, los cuales poseen una trayectoria histórica que condujo a la observancia de los mismos, se encuentra el de congruencia, es decir que a un acto o hecho ilícito, la ley penal le tiene asignado un castigo o consecuencia jurídica determinada constituyendo la plataforma de dicho principio la garantía Constitucional el Debido Proceso. Sin embargo la norma modelo establece que, dentro del ordenamiento jurídico penal podría tipificarse un hecho con un tipo penal X y no sancionarlo con la consecuencia jurídica que tiene asignado en el mismo cuerpo legal, sino con otra consecuencia jurídica; o dicho en otras palabras, aplicarle una pena o consecuencia jurídica establecida en otro ordenamiento jurídico con la cual se violentaría la observancia del principio de congruencia.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Asimismo, cabe mencionar que de conformidad con el Artículo 17 de la Constitución Política y el Artículo 1 del Código Procesal Penal y 1 del Código Penal que establecen que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley (Nullum poena sine lege), de lo que se estima la dificultad legal de aplicar penas no establecidas dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco; es decir, aplicar a un tipo penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no la consecuencia jurídica que establece la norma, sino aplicar una consecuencia jurídica o una pena no prevista en la norma.

5. Artículo 18. El mismo en su literal i) expresa que con la solicitud de extradición deberá acompañarse transcripción auténtica de los textos legales que tipifiquen y sancionen el delito.

Sin embargo el Artículo 19 expresa que la solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañen, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. Existiendo en consecuencia contradicción en dichas normas del Convenio modelo.

Esta Asesoría Jurídica estima que por ser los puntos señalados no sólo de forma sino que algunos plantean la revisión de fondo, toda vez que los mismos al quedar redactados en la forma planteada, constituirán material suficiente para los Abogados Defensores para construir sus argumentaciones que tiendan a impedir, o por lo menos retrasar la extradición, sería conveniente en consecuencia el replanteamiento de los mismos."

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

En la misma forma y modo aparecen los otros dictámenes vertidos sobre el contenido del Tratado sometido a consideración de este alto Organismo del Estado.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION SOBRE LAS OPINIONES.

Esta Comisión no puede pasar por alto y dejar de señalar la irresponsable actitud de las autoridades del Organismo Ejecutivo, al remitir al Congreso un texto de Tratado que no es coincidente con el que fuera sometido como Convenio modelo a las entidades que emitieron oportunamente su opinión sobre el mismo, lo que implica necesariamente que se remite el documento final, sin que cuente con dictámenes u opiniones que respalden la posición del Ejecutivo ante este Congreso.

OPINION DE LA COMISION SOBRE EL CONTENIDO DEL TRATADO.

No obstante la observación anteriormente hecha, esta Comisión encuentra que el Tratado adolece aún de algunos de los defectos acertadamente señalados por la Asesoría Jurídica del Ministerio Público y compartida por otras entidades del Organismo Ejecutivo y del Organismo Judicial, fundamentalmente las siguientes:

- a. El Artículo 1 de Tratado indica que cada una de las Partes acuerda extraditar hacia la otra Parte, a cualquier persona que se encuentre en su territorio, sin hacer ningún tipo de salvedades.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

extradición, indica que la misma se regulará por lo dispuesto en los tratados internacionales; y al respecto, la Corte de Constitucionalidad al hacer la interpretación sobre el mismo indica: *"...esta Corte considera oportuno expresar que el artículo 27 de la Constitución de la República, que contempla lo relativo a la extradición y sujeta su regulación a lo que para el efecto se establezca en los Tratados Internacionales, puntualiza dos aspectos de esta institución, que son: la extradición activa y la pasiva; y, así, se ve que el tercer párrafo del artículo 27 citado, que preceptúa que 'Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos...'; se refiere a la extradición activa e indica que el Estado de Guatemala tiene prohibido solicitar a otro Estado la entrega de un guatemalteco, con la intención de someterlo a la justicia nacional, cuando lo esté persiguiendo por delitos políticos. En la parte siguiente de este párrafo, la Constitución refiriéndose a los guatemaltecos, contempla otro supuesto, cuando dice: '... quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero...'; como se ve, esta norma regula la extradición pasiva y tiene un carácter general y prohibitivo, que impide que los guatemaltecos sean entregados por el Estado de Guatemala a gobierno extranjero que los reclame...." Gaceta No. 35, expediente No. 458-94, página No. 31, sentencia: 21-02-95.*

En igual forma contempla esta prohibición el Artículo 345 del Código de Derecho Internacional Privado, incorporado al derecho interno guatemalteco mediante el Decreto 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, que indica que los Estados Contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales, adicionando que la Nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligado a juzgarlo, principio que igualmente es

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

conculcado con artículos posteriores del Tratado de Extradición objeto del presente dictamen.

b. El Artículo 2 del Tratado numeral 3) literales a) y b), indican, el primero que no importará si las leyes de las Partes consideran la conducta constitutiva del delito dentro de la misma naturaleza de delitos o denominan al delito con la misma terminología y seguidamente la literal b), indica que la totalidad de la presunta conducta delictiva de la persona cuya extradición se solicita deberá ser tomada en cuenta y no importará si, conforme las leyes de las partes, difieren los elementos constitutivos del delito.

Este Artículo infringe a criterio de la Comisión los principios consignados en el Artículo 17 de la Constitución Política de la República y primero respectivamente, de los Códigos Penal y Procesal Penal vigentes en Guatemala, que determinan claramente que no hay delito ni pena sin ley anterior, indicando que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penados por ley anterior a su perpetración.


En igual forma hay que señalar que el artículo precitado del Tratado, es incongruente y contradictorio, con el contenido del Artículo 2 del mismo, el cual indica que "cualquiera que sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambas partes".

El mismo defecto señalado, puede indicarse para los numerales 4 y 5 del Artículo 2 del Tratado sometido a estudio de esta Comisión.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

c. En el Artículo 3, numeral 7) se indica que cualquiera de las Partes tiene el derecho de rehusar la extradición de sus nacionales. La Parte que por esa razón no entregue a su nacional, promoverá, a pedido de la Parte requirente, su enjuiciamiento, manteniéndola informada del curso del proceso y, finalizado éste, remitirá copia de la sentencia. Es criterio de esta Comisión que la redacción del artículo mencionado, atenta contra los principios consignados en el Artículo 203 de la Constitución Política de la República, que garantiza la independencia del Organismo Judicial y la potestad de juzgar, determinando que la justicia se imparte de conformidad con la propia Constitución y las leyes de la República, prohibiendo que cualquier otra autoridad intervenga en la administración de justicia.

d. El Artículo 9 del Tratado indica que cuando la infracción determinante del pedido de extradición fuese punible con la pena de muerte, la parte requerida "podrá" condicionar la extradición a la garantía previa, dada por la parte requirente por la vía diplomática, de que en caso de condena, tales penas (de muerte) no serán aplicables. Esta norma a criterio de la Comisión, es inaceptable a la luz del contenido del Artículo 18 de la Constitución Política de la República, que taxativamente indica que la pena de muerte no podrá aplicarse a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición, no como una cuestión potestativa, sino imperativa.



DICTAMEN DE LA COMISION:

Luego del análisis efectuado por la Comisión de Relaciones Exteriores de este Organismo y teniendo en cuenta el contenido del

Comisión de Relaciones Exteriores

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, al emitir dictamen, lo hace en sentido desfavorable, debiendo una vez aprobado éste por el Honorable Pleno, archivar el expediente respectivo.

**SALA DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, GUATEMALA, OCHO DE MAYO DE
DOS MIL SIETE.**

Zury Ríos Montt

Presidenta

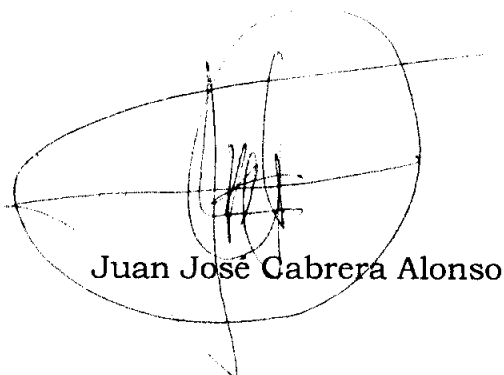
Eduardo Meyer Maldonado
Vicepresidente

Jorge Estuardo Cirón
Secretario


Edgar Arevalo Barrios

Rafael Eduardo Barrios Flores

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.




Juan José Cabrera Alonso

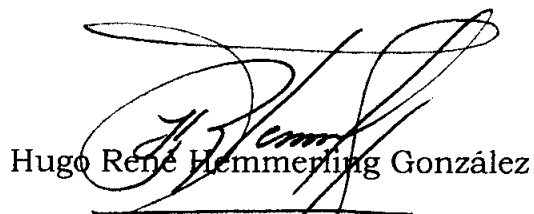


César Emilio Fajardo Morales

Adolfo Otoniel Fernández Escobar



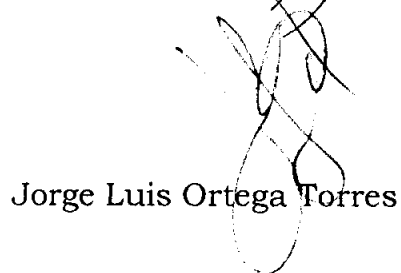
Carlos Enrique López Girón



Hugo René Hemmerling González



Jorge Méndez Herbruger




Jorge Luis Ortega Torres




Luis Fernando Pérez Martínez

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

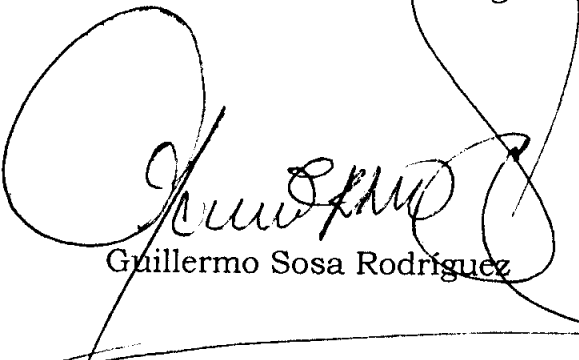
Héctor Julio Pérez Rojas

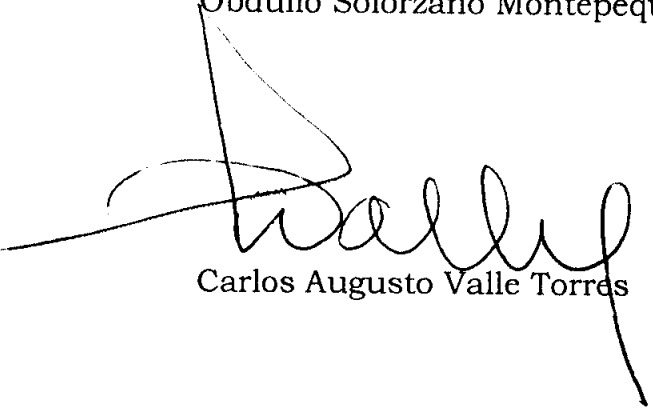

Jorge Rios Castillo


Mario Israel Rivera Cabrera


Ewald Mauricio Schell Aguilar

Obdulio Solórzano Montepeque


Guillermo Sosa Rodríguez


Carlos Augusto Valle Torres

Luís Alberto Velásquez Cerdas